

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

| APELACIÓN - SENTENCIA |  |
|-----------------------|--|
| DEMANDANTE            | GLADYS ELENA MUNERA ORTEGA                           |
| DEMANDADOS            | COLPENSIONES – PORVENIR S.A.                         |
| RADICADO              | 05001-31-05-004-2015-01919-01                        |
| MAGISTRADA PONENTE    | MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO                         |
| TEMA                  | Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional |
| DECISIÓN              | Adiciona y confirma                                  |

*Medellín, seis (06) de agosto de dos mil veinte (2020)*

*Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual*

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria

de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **GLADYS ELENA MUNERA ORTEGA** en contra de **COLPENSIONES** y de **PORVENIR S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 022**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

## **I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de las entidades demandadas, contra la sentencia que profirió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 19 de noviembre de 2018; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que nació el 29 de agosto de 1960; se vinculó al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde el 30 de enero de 1980, donde permaneció hasta mayo de 1995, para posteriormente trasladarse a PORVENIR S.A.<sup>1</sup>, a partir de junio de 1995, donde permanece actualmente.

Se duele que, el asesor de PORVENIR S.A., no le brindó la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la suficiente información; y que, al contrario, le ocultó información relevante, induciéndola al error, y omitiendo brindarle toda la asesoría y acompañamiento pertinentes, indispensables para haber tomado la decisión que más le convenía.

---

<sup>1</sup> Se hace referencia a PORVENIR S.A., como la entidad que absorbió corporativamente a las administradoras COLPATRIA S.A. y HORIZONTE S.A., a las cuales en su momento perteneció la demandante.

Estima que, conforme a los cálculos proyectados, su pensión es abiertamente inferior en el régimen de ahorro individual con solidaridad, a la que le correspondería en el régimen de prima media con prestación definida, de haber permanecido en dicho régimen.

### III. – PRETENSIONES

La acción judicial esta dirigida a que se declare la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por PORVENIR S.A., y que en consecuencia, se ordene a dicha entidad, trasladar a COLPENSIONES todas las sumas que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, incluidos bonos, cotizaciones, sumas adicionales y rendimientos generados; debiendo ordenar a esta última, recibir todos esos valores y activar la afiliación de la demandante al régimen de prima media con prestación definida, como si nunca hubiese dejado de pertenecer al mismo; condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

### IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las accionadas a dar respuesta a la misma por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales (folios 70 y ss. del expediente).

**COLPENSIONES**, describió el traslado de esta acción, según escrito visible a folios 70 al 76 del expediente. A través del mismo, se opuso a las pretensiones de la demanda; aceptó la edad de la demandante, su afiliación inicial a prima media y la solicitud que elevó pretendiendo regresar al régimen, negando los demás, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“inexistencia de obligación alguna a cargo de Colpensiones”*, *“buena fe de Colpensiones”*, *“imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones*

*pretendidas”, “compensación”, “imposibilidad de condena en costas” y “prescripción”.*

PORVENIR S.A., allegó contestación a la demanda, visible a folios 105 al 125 del expediente.

A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; negó los hechos de la acción, salvo el traslado de régimen y la proyección de un valor aproximado de su pensión, los cuales aceptó, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“prescripción”, “falta de causa para pedir”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “buena fe”, y “enriquecimiento sin causa”.*

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública celebrada el 19 de noviembre de 2018, el Juez de conocimiento, accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, al advertir que PORVENIR S.A. no cumplió con su carga probatoria de acreditar haber brindado asesoría suficiente a la demandante, por lo que le impuso a dicha entidad, la obligación de devolver a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, tales como cotizaciones, aportes, eventuales bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, gastos de administración, descuentos con destino al fondo de solidaridad, y los rendimientos que se hubieren generado.

Condenó en costas procesales a PORVENIR S.A.; y a COLPENSIONES le impuso la obligación de recibir todos esos valores y activar la afiliación de la demandante al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad.

## **VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los apoderados judiciales de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES.

**PORVENIR S.A.** sustentó la alzada, refutando todo el sentido de la decisión; y, a su vez reprochó la orden de devoluciones dada por el A quo en la sentencia, haciendo especial énfasis en su desacuerdo con la obligación de remitir a Colpensiones los gastos de administración, las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje descontado con destino al Fondo de la Garantía Mínima, lo cual sustentó respectivamente, expresando que, PORVENIR S.A. cumplió con todas las exigencias legales al momento del traslado de régimen pensional de la actora, suministrándole la información necesaria, y; que, además, adelantó una debida administración de los recursos de la cuenta de ahorro individual de la asegurada, al punto de haber generado rendimientos que, incluso superaron el capital, sin que se verifique deterioro del bien administrado, evidenciándose incremento del mismo con los rendimientos generados; y; que tanto en el RAIS como en prima media existe la obligación de descontar el porcentaje de solidaridad, en beneficio de los propios afiliados, ya que se trata de una obligación legal con una destinación específica. Adujo, que, incluso de regresar las cosas al estado anterior, no deberían remitirse los rendimientos generados, y formuló como alternativa para que no se remitan las cuotas de administración, que sea Colpensiones quién deba indexar los valores de la cuenta de ahorro individual de la demandante, para que se mantenga su valor presente.

Agregó que en ninguna norma legal se imponen esas obligaciones, existiendo, al contrario, disposiciones legales que imponen a las administradoras estos descuentos, y, que la demandante no incluyó en sus pretensiones estas devoluciones.

Manifestó, que resulta improcedente que se ordene la devolución de primas de seguros y reaseguros pagadas, cuando la demandante estuvo cubierta por estos seguros durante su permanencia en el RAIS.

Hizo referencia a algunas providencias proferidas por este Tribunal, que denotaban que no existían esas obligaciones de devolución, ya que dichos rubros nunca contribuyeron a enriquecer a la entidad administradora.

**COLPENSIONES**, por su parte, estuvo inconforme con el hecho de que no se le hubieren fijado costas procesales en su favor, las cuales estima, - deben pagársele-, y lo sustentó manifestando que, la oposición a las pretensiones que formuló en su contestación, se justifica desde el punto de vista, que siempre se actuó conforme a la ley, en tanto cuando la actora solicitó su retorno, le faltaban menos de 10 años para pensionarse, siendo una solicitud improcedente.

Agregó, que, si bien se le dio una orden a Colpensiones, de recibir unos dineros y activar la afiliación de la demandante, ello no equivale en sentido estricto a una condena, llamando la atención de que se entienda que la entidad es un tercero que se convocó a juicio, pero que deben pagársele agencias en derecho, ya que tuvo que incurrir en una defensa técnica de sus intereses dentro del proceso.

#### **Alegatos de Conclusión:**

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal pertinente, el apoderado judicial de la demandante presentó escrito de alegaciones, a través de los cuales reiteró los fundamentos jurídicos de la demanda y las alegaciones formuladas en primera instancia, haciendo un recuento de los principales elementos de la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los cuales –estima- deben llevar a este juez colegiado, a confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia.

El Dr. Daniel Rendón Acevedo, con TP. Nro. 317.120 del CSJ, quien presentó la acreditación pertinente (escritura pública Nro. 1717 de 2019), como apoderado judicial de PORVENIR S.A., y a quien se le reconoce personería amplia y suficiente para representar los intereses de la entidad, hizo uso de la oportunidad de presentar alegatos. A través de los mismos, insistió en la validez del acto de traslado que se adelantó con la demandante, al haberse dado supuestamente cumplimiento a todas las exigencias legales, y enmarcarse dentro de los requerimientos de las respectivas autoridades administrativas.

Destacó el régimen, a partir de su funcionamiento con el ahorro de los propios asegurados, a fin de que pudieren cumplir las expectativas de construir su propia pensión, lo cual considera, depende únicamente del afiliado. Enarboló la suscripción del formulario de afiliación, como la prueba que denota voluntariedad de la demandante; llamó la atención de la corporación, acerca de que para la fecha de traslado no existían las obligaciones de asesoría que actualmente se están exigiendo; resaltó que el error de hecho solo vicia el consentimiento, cuando versa sobre la naturaleza del acto o contrato, lo cual considera que no ocurrió en este caso; subrayó que la actora no puede obtener provecho de su propia culpa o falta de diligencia; reseñó el fundamento legal de los descuentos realizados a la cotización, en orden a que no se ordene devolver las sumas a que hizo referencia el A quo, y; reiteró los fundamentos que sustentan el recurso de alzada que se está desatando, presentados en su momento por la apoderada judicial recurrente.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da

mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional por ausencia de asesoría.-**

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por los apoderados judiciales de las entidades demandadas; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en virtud del Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del RPM al RAIS que realizó la demandante, a través de PORVENIR S.A., alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.



Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las **sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019**, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que es desde la propia creación de los regímenes que se estableció la obligación a las administradoras de brindar una completa asesoría pensional, pese a que han sido recientes normas las que han desarrollado el tema; que a nivel procesal rigen condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Esta última sentencia citada, proferida por la Sala de Casación Laboral (SL 1688 de mayo de 2019), precisó que, *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Esta postura es consecuente con los postulados que rigen en materia social, conforme a los cuales en el juicio jurídico sobre los derechos de los trabajadores y los afiliados a la seguridad social, resulta más relevante la realidad que los formalismos; la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrado la formación del derecho a la pensión, y; el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, es el primero, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que eventualmente exista movilidad entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

### **CASO CONCRETO**

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante a folios 126 y siguientes del expediente, donde se observan formularios de afiliación, certificación de ASOFONDOS e historias laborales, se acredita que la señora GLADYS ELENA MUNERA ORTEGA, perteneció a COLPENSIONES entre el 30 de enero de 1980 y mayo de 1995, pasando a partir del 1º de junio de 1995 a ser afiliada de PORVENIR S.A., donde permanece actualmente.

Revisadas en detalle las consideraciones del A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que PORVENIR S.A. no alcanzó a probar dentro del juicio, haber brindado asesoría con suficiencia a la demandante, en su proceso de traslado.

Teniendo en cuenta que la validez del traslado de régimen tiene como requisito esencial y presupuesto fundamental el cumplimiento de parte de la administradora de todas las obligaciones de asesoría pensional correspondientes al caso concreto, esta Sala encuentra que la decisión del A quo tuvo en cuenta la dinámica procesal probatoria que rige en estos casos, auscultando más allá de la simple suscripción de un formulario de afiliación con nota de supuesta voluntariedad y libre escogencia, para concluir en la ineficacia de un acto celebrado en el año 1995, que no alcanzó a producir efectos, al ser ineficaz.

Y es que si bien, el legislador ha dispuesto la obligación de que el traslado quede documentado en un formulario de afiliación, en dicha suscripción no se agotan todas esas obligaciones profesionales a cargo de las administradoras previsionales, ya que debe existir todo un proceso de asesoría absoluta, que además del formulario de afiliación comprenda a cabalidad un asesoramiento sobre todas las implicaciones que puedan representar para el asegurado el cambio del régimen pensional de reparto a uno capitalizable, que fue lo que no ocurrió en este caso.

Desde este punto de vista, no tienen vocación de prosperidad las argumentaciones de la apoderada judicial de PORVENIR S.A., planteadas en la alzada, y ampliadas en la etapa de alegatos de conclusión, ya que estas exigencias han existido desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, y a nivel procesal se acreditan en el marco de la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al respectivo fondo acreditar que en efecto brindó la asesoría suficiente al asegurado, que fue precisamente lo que no alcanzó a probar PORVENIR S.A. en el debate probatorio.

En consecuencia, esta Sala **CONFIRMARÁ** la decisión de primer grado.

Ahora, la apelación de la apoderada judicial de PORVENIR S.A., comprende subsidiariamente la solicitud de que se modifique la orden de

devolución que el A quo le impuso, solicitando que la misma no se extienda a los gastos de administración, las primas de seguros y reaseguros y al porcentaje descontado con destino al Fondo de la Garantía Mínima (Fondo de solidaridad).

Es preciso destacar que el sentido de dicha apelación, coincide con los tópicos que precisamente esta Sala debe abordar en conocimiento en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad pública codemandada, al tratarse de un tema que involucra la financiación de las eventuales prestaciones económicas que se causen a futuro, por lo que serán desatados de manera uniforme:

Al respecto debe decirse, que, esta Sala no accederá a los pedimentos de la apoderada de PORVENIR S.A., teniendo en cuenta que el efecto jurídico consecencial a la declaratoria de ineficacia, es que las cosas retornen al estado inicial, tal y como si el traslado no hubiere existido, luego, sus argumentos planteados en oposición a la orden de devolución los gastos de administración, primas de seguros y el porcentaje descontado con destino al Fondo de la Garantía Mínima, no alcanzan a derruir tal obligación, ya que el A quo fue consecuente con el efecto jurídico que se deriva de la declaratoria de ineficacia, cual es, que las cosas retornen al estado anterior en que se encontraban al momento del traslado. Si bien PORVENIR S.A. adelantó una debida administración de los recursos de la cuenta de ahorro individual de la asegurada, generando rendimientos, es claro que en prima media también existe la obligación de descontar el porcentaje de solidaridad, en beneficio de los propios afiliados, a partir del efecto de la ineficacia, y, además, no puede mantenerse el cobro de unas sumas por administración, cuando fue el propio fondo privado el que dio lugar a la ineficacia. En consecuencia, todo debe retornar a Colpensiones, como si PORVENIR S.A. nunca hubiere estado facultada para efectuar descuento alguno.

Respecto de los rendimientos, los mismos ya hacen parte de la esfera patrimonial de la asegurada, y han ingresado a su cuenta de ahorro individual, merced a su permanencia en el régimen privado, por lo que no resultaría

ajustado a derecho, que se omita su devolución, al haber sido ineficaz la afiliación, en tanto el fondo, fuera de que incurrió en falta al deber de información, también pudo manejar los recursos de la actora, en el adelantamiento de sus inversiones y operaciones monetarias, que también generaron rendimientos a su propia entidad, o que por lo menos le permitieron disponer de esos recursos para el cumplimiento de sus operaciones ordinarias de inversión.

Precisamente el argumento de la alzada, conforme al cual se subraya, que en ambos regímenes existe la obligación de descontar de la cotización un porcentaje con destino al Fondo de Solidaridad, constituye la razón por la cual debe devolverse íntegramente la cotización a prima media, para que Colpensiones como administradora de tal régimen lleve a cabo los descuentos de Ley.

Con relación a la solicitud que formula la apoderada de PORVENIR S.A. en su recurso, solicitando a esta Sala, que ordene a Colpensiones –en sustitución a la orden de devolución impuesta al fondo privado, indexar las sumas de la cuenta de ahorro individual de la asegurada, ello no es posible, ya que comprendería imponerle a Colpensiones el ajuste monetario a un capital afectado por descuentos, que la entidad pública no realizó, y, en todo caso, terminaría por erigirse en una alternativa, que representaría atribuirle consecuencias desfavorables a dicha entidad, debiendo destinar recursos públicos con destinación específica, al cubrimiento de las omisiones de un tercero de derecho privado, a fin de proteger el interés económico de este último (Porvenir SA).

Ahora, las citas jurisprudenciales que hace la apoderada judicial de PORVENIR S.A., destacando otros casos donde no se ha ordenado la devolución de las cuotas de administración y los otros conceptos por parte de esta Corporación, hacen parte de posturas ya revaluadas, siendo el criterio imperante en la actualidad, la orden de devolución de dichos conceptos.

Así las cosas, se advierte ajustada a derecho la orden de devolución dada por el A quo, que comprendió devolver sumas adicionales de la aseguradora, cuotas de administración, descuentos con destino al fondo de la garantía mínima, y el eventual bono pensional, sin que importe que en las pretensiones se haya detallado cada uno de estos rubros.

Con todo, esta Sala **ADICIONARÁ** el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efecto de que, tales sumas se devuelvan a COLPENSIONES dentro del término de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, por parte de PORVENIR S.A.

Resuelto lo anterior, solo resta pronunciarse sobre el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de COLPENSIONES, el cual se despachará desfavorablemente, y es que si bien, es cierto, como lo hacer ver el recurrente, que Colpensiones solo dio cumplimiento a la Ley, negando en su momento el retorno al régimen que administra, al evidenciar configurada la causal establecida en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, e indudablemente no ser quien dio lugar al ineficaz traslado, ello permite concluir, como lo hizo el A quo, que Colpensiones no debe ser condenada en costas procesales, ya que en efecto, su comparecencia al juicio es solo consecuencial, y obedece a la necesidad de que reciba unas sumas que serán remitidas por el fondo privado, lo que no es propiamente una condena o vencida en juicio. Pero de ahí, a que se estime que deben pagársele costas procesales a su favor, no es preciso acceder a ello.

Bajo las reglas de procedencia de las agencias en derecho contenidas en el artículo 365 del CGP., ni PORVENIR S.A., ni la demandante debe pagarle agencias en derecho a COLPENSIONES. La primera, porque no es vencida en juicio frente a Colpensiones, y el fondo, tampoco adopta esa condición frente a aquella.

**COSTAS PROCESALES DE 2 INSTANCIA.**

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo de PORVENIR S.A. y de COLPENSIONES, por haber resultado ambas vencidas en el recurso de apelación, debiendo dichas entidades, pagar a la demandante, cada una, la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, a título de agencias en derecho de segunda instancia.

### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: ADICIONAR** el numeral segundo de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación y Consulta, a efecto de que las sumas que se impuso a **PORVENIR S.A.** devolver a **COLPENSIONES**, se remitan dentro del término de los 30 días, siguientes a la notificación de esta providencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** dicha sentencia en todo lo demás.

**TERCERO: CONDENAR** a **PORVENIR S.A.** y a **COLPENSIONES** a pagar a la señora **GLADYS ELENA MUNERA ORTEGA** las costas procesales de segunda instancia, fijándose agencias en derecho a cargo de cada una de estas entidades, en la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

**CUARTO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**SE ORDENA** la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los magistrados



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**  
Magistrada

Certifico:  
Que el auto anterior fue notificado por  
ESTADOS Nro. 107 fijado hoy en la  
Secretaría de este Tribunal, a las 8 a.m.

Medellín, 10 de agosto de 2020

---

Secretario